

el Alcalde 1º constitucional de la Villa de Camargo, C. Feliciano Villareal.

Quinto. Notifíquese, expídanse y remítanse las copias de estilo, y mándese la causa original á la Suprema Corte de Justicia para los efectos del artículo 34 de la ley de 14 de Febrero de 1826, adjuntándose copia de esta sentencia y del dictámen fiscal respectivo, conforme está dispuesto por circular de la misma Suprema Corte de 18 de Febrero de 1871.

Yo el C. Lic. Rafael Treviño y Garza, Magistrado del Tribunal de Circuito de Nuevo Leon, Coahuila y Tamaulipas, así definitivamente juzgando, lo decreté y firmé actuando con testigos de asistencia. Doy fé.—Firmados.—*Lic. Rafael Treviño y Garza.*—A.—*Santiago de Leon.*—A.—*Jesus Paz.*

Es copia que certifico. Monterey, Mayo 6 de 1875.—*Rafael Treviño y Garza.*—A.—*Santiago de Leon.*—A.—*Jesus Paz.*

Pedimento del C. Procurador General de la Nacion.

El Procurador General interino dice: que en el Juzgado de Distrito de Matamoros, se falló la causa que la Sala tiene á la vista, y que se comenzó á formar por el Alcalde 1º Constitucional de la villa de Camargo, contra D. Ignacio Palafox por sospechas de falsificación de un documento Aduanal, pronunciándose la sentencia que aparece á la foja 126, en la que se absolvió del cargo al acusado, declarando que la formacion del proceso, en nada habia perjudicado su reputacion. Esta sentencia se confirmó por el Tribunal de Circuito de Monterey, y por tal causa los autos han venido á esa Superioridad para los efectos de la revision.

El que suscribe no encuentra motivo para exigir la responsabilidad á los funcionarios que intervinieron en la formacion de este proceso; y por lo mismo pide á la Sala

se sirva declararlo así, dándolo al mismo tiempo por revisado.

México, Mayo 20 de 1875.—*Lozano.*

Auto de revision de la Suprema Corte de Justicia.

México, Mayo 26 de 1875.

Por revisado y no apareciendo mérito para la responsabilidad, devuélvanse las actuaciones y archívese á su vez el Toca.—

José M. Iglesias.—*M. Auza.*—*Ignacio Altamirano.*—*L. Velazquez.*—*M. Zavala.*—*Lic. Enrique Landa*, secretario.

Son copias. México, Junio 1º de 1875.—*Enrique Landa.*

AMPARO

Promovido ante el Juzgado 2º de Distrito de Sonora, por el Dr. Gabriel Monteverde, contra el C. Juez 1º Suplente de 1ª instancia de Hermosillo, que lo redujo á prision en pena de haberse rehusado á reconocer el cadáver de un individuo.

Sentencia del C. Juez de Distrito

Guaymas, Abril 19 de 1875.

Visto el presente juicio de amparo promovido en 15 de Febrero último, por el Dr. C. Gabriel Monteverde, contra el C. Juez Primer Suplente de 1ª Instancia de Hermosillo, Francisco S. Robles, que lo redujo á prision en pena de haberse rehusado á reconocer el cadáver de un individuo asesinado la noche anterior, por considerar violadas el quejoso con tal acto, las garantías que le aseguran los arts. 5º y 16º de la Constitución General; la suspension del mis.

mo acto, decretada por este Juzgado; el informe documentado sobre lo principal, rendido por la autoridad ejecutora; el pedimento del C. Jefe de Hacienda en funciones de Promotor fiscal; las pruebas aducidas por el actor en el término probatorio; la citación para sentencia con cuanto mas de autos consta, y

Considerando: que sin tomar en consideración las pruebas del actor, por no haberse promovido ante este Juzgado, hasta los documentos de justificación del citado informe para comprobar el acto reclamado; á saber, que el C. Dr. Monteverde fue aprehendido por el C. Juez Robles á prestar un servicio personal sin su consentimiento ni retribución, y que se procedió contra su persona sin orden escrita, como lo declara el Jefe de policía encargado de ejecutar la del mencionado Juez, diciendo: "que la orden escrita la recibió del Juez después de estar preso el Dr., pero en el mismo día, (foja 6 fte.);" que la única causa legal invocada por la autoridad ejecutora para fundar su procedimiento, es el art. 466 de la ley de administración de justicia del Estado de 17 de Mayo de 1862, que dice: "Toda persona de las que pueden ser llamadas á declarar, que, sin causa justificada, no comparezca en el término que por el Juez se le presija, sufrirá una multa que no baje de tres, ni pase de cincuenta pesos, ó una prisión si no tuviere con qué pagarla, que no baje de seis días, ni pase de un mes, la que se impondrá y hará efectiva de plano por el Juez que conozca de la causa" que suponiendo constitucional ese artículo y aplicable no solo á los testigos comunes presenciales ó por otro motivo impuestos de un hecho criminal, sino también á los peritos facultativos, la pena en él señalada es alternativa; de manera que no puede imponérseles prisión, si no es en el caso de *no tener con qué pagar multa*; que la posición del C. Dr. Monteverde, aleja en el presente la posibilidad de esta última suposición, constando además del contesto mismo de la or-

TOME VII—PARTE II.

den que dicha autoridad pretende haber dado oportunamente, desmintiéndolo el encargado de cumplirla (fs. 6 fte. citada y 8 fte.), que no se obsecuó en ella aquel precepto legal, puesto que no era el Jefe de la policía, sino el mismo Juez, quien debía calificar si el multado tenía ó no con qué pagar la multa: que la misma inducción puede hacerse del auto condenatorio proveído en seguida por el C. Juez Robles (fs. 4 fte. y vta.), fuese alternativo, como él lo pretende, ó bien absoluto, como lo sostiene el actor, porque habiéndose notificado á éste en la cárcel, es decir, después de estar preso, (fs. 2 fte.), la forma no alteraba su naturaleza: que en ambos casos, por consiguiente, es flagrante la violación de las garantías invocadas por el quejoso, porque se le exigió un servicio personal sin la justa retribución y sin su pleno consentimiento, molestándosele á la vez en su persona sin orden escrita y sin causa legal para el procedimiento: que en vista de la declaración del Jefe de policía, Ramon Moraga, aducida por el repetido Juez para justificar su informe, la del cabo de la misma, Alejo Tresierra, aparece falsa y él en consecuencia reo de perjurio; por tales consideraciones y con fundamento de los arts. 1º, 5º, 16, 101 y 102 de la Constitución general y 13 y 27 de la ley orgánica de 20 de Enero de 1869, fallo: 1º La Justicia de la Unión ampara y protege al C. Dr. Gabriel Monteverde, contra los procedimientos de que se queja del C. Juez 1º suplente de 1ª Instancia del Distrito de Hermosillo, Francisco S. Robles. 2º Sáquese testimonio de lo conducente al perjurio de que se habla en el último considerando, y remítase al C. Juez de 1ª Instancia propietario de dicho Distrito, para los efectos legales. 3º Notifíquese, publíquese en los periódicos del Estado y elévense los autos á la Suprema Corte de Justicia para su revisión. El C. Juez de Distrito de Sonora, así lo decretó definitivamente y firmó por ante mí. Doy fé.—

D. Elias G.—Matias Morán, secretario.

Es copia que certifico. Guaymas de Zaragoza, Abril 20 de 1875.—*Matías Morán*, secretario.

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Mayo 27 de 1875.

Visto el juicio de amparo promovido ante el Juzgado de Distrito de Sonora, por el Dr. Gabriel Monteverde, contra el C. Juez 1º Suplente de 1ª Instancia de Hermosillo, que lo redujo á prision en pena de haberse rehusado á reconocer el cadáver de un individuo, con cuyo procedimiento, en opinión del quejoso, se han violado en su perjuicio las garantías consignadas en los arts. 5º y 16 de la Constitución federal; visto el informe de la autoridad responsable, el parecer fiscal, la sentencia del Juez de Distrito, y

Considerando: que consta de autos, que el solicitante no fué conducido á la cárcel en virtud de una orden escrita, como lo previene el artículo constitucional; que imponiendo la ley de administración de justicia en el Estado, en que el Juez ha basado sus procedimientos, una pena alternativa á las personas que pudiendo ser llamadas á declarar, no comparezcan en el término que ella fije, no estuvo al arbitrio del Juez elegir uno de los términos de la disposición penal, como lo hizo en el presente caso, imponiendo al quejoso la prision cuando tenia el derecho de optar por la multa; que faltándole para tal determinación la competencia requerida en el art. 16 de la Constitución, importó este acto la violación de otra garantía por parte del Juez mencionado.

Con fundamento de los arts. 101 y 102 de la Constitución, se declara: que es de confirmarse y se confirma la sentencia del Juez de Distrito que concedió amparo al quejoso.

Devuélvanse las actuaciones al Juzgado de su origen, acompañándole copia de esta

sentencia para los efectos consiguientes, archivándose á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los ciudadanos Presidente y Ministros que formaron el Tribunal Pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron.—*OC. Presidente.*—*M. Auza.*—*MM.*—*José Arteaga.*—*Ignacio Ramírez.*—*Ignacio M. Altamirano.*—*E. Montes.*—*L. Velazquez.*—*M. Zavala.*—*José García Ramírez.*—*Enrique Landa*, secretario.

Es copia que certifico. México, Julio 28 de 1875.—*Enrique Landa.*

AMPARO

Promovido por el C. Sinforoso Banda, ante el Juzgado de Distrito del Estado de Jalisco, contra la Jefatura de Hacienda de dicho Estado, que procedió al embargo del establecimiento de tipografía y encuadernación, situado á la espalda del palacio de la ciudad de Guadalajara.

Pedimento del C. Promotor Fiscal.

C. Juez.

“El Promotor fiscal dice:

“La Jefatura Superior de Hacienda cumpliendo con una orden telegráfica de la Tesorería General de la Nación, para que embargara los bienes del C. Isaac Banda, para asegurar su responsabilidad como fiador del pagador de la 1ª Brigada de Artilleros, descubierto en mas de tres mil pesos, y entre dichos bienes, el establecimiento tipográfico que especialmente se señaló como garantía en la escritura de fianza respectiva procedió el 7 del corriente á embargar la